



JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali, trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio N° 143

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DCHO-LESIVIDAD
DEMANDANTE	COLPENSIONES
DEMANDADO	NIDIA RINCON DE DURANGO Y OTRO
RADICADO	76-001-33-33-001-2020-00078-00

ASUNTO A RESOLVER

Procede este despacho judicial a resolver la medida cautelar de suspensión provisional solicitada por la parte actora en el presente proceso, de conformidad con el artículo 233 del CPACA.

ANTECEDENTES

La parte accionante solicita que se disponga la **SUSPENSIÓN PROVISIONAL** de la Resolución No. 2323 del 17 de abril de 1996, por medio de la cual el ISS reconoció la pensión de sobreviviente a la señora NIDIA RINCON DE DURANGO con ocasión del fallecimiento de su hijo Jhon Fernando Durango Rincón, sin advertir que le causante se había trasladado al Fondo Privado Porvenir.

Se expone en la demanda que de la revisión del expediente pensional del señor Jhon Fernando Durango Rincón se encontró que el causante en vida solicitó el traslado a Porvenir quedando como fecha efectiva de la afiliación a partir del 23 de julio de 1994.

Que el señor Jhon Fernando Durango Rincón falleció el 18 de febrero de 1995 conforme al registro civil de defunción.

Expone que, con ocasión del fallecimiento del citado, PORVENIR a través del comunicado No. 012334 del 24 de abril de 1997 reconoció una pensión de sobrevivientes a la señora NIDIA RINCON DE DURANGO en calidad de madre del causante, la cual se encuentra activa en la nómina en la AFP, de acuerdo a certificación del 18 de julio de 2019.

Indica que el Instituto de Seguros Sociales – ISS mediante la Resolución No. 2323 del 17 de abril de 1996 reconoció una pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor Jhon Fernando Durango Rincón a favor de la señora NIDIA

RINCON DE DURANGO, en calidad de madre del causante, quien se encuentra activa en nómina de pensionados de Colpensiones y devengando el 100% de la mesada pensional.

Manifiesta que en mesa conjunta de trabajo para la definición de la afiliación válida de los casos reportados con doble beneficio RAIS- RPMD se reunieron funcionarios de Colpensiones y AFP – PORVENIR, quienes de acuerdo con los soportes documentales concluyeron que la afiliación válida del señor Jhon Fernando Durango Rincón es la AFP PORVENIR.

Argumenta que de acuerdo a lo previsto en la Ley 100 de 1993, no es posible que una persona se encuentre afiliada simultáneamente a los dos regímenes pensionales y por ende recibir del Sistema General de Pensiones el otorgamiento de dos o más prestaciones económicas por los mismos tiempos cotizados o laborados como es el caso de la demandada.

Solicita la suspensión del acto administrativo demandado, toda vez que se está generando un detrimento a las arcas del Estado, haciéndose imperioso que se ordene la suspensión de la prestación hasta tanto se revoque el acto administrativo por el cual el ISS reconoció la pensión de sobreviviente a la demandada.

CONTESTACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR

La demandada señora NIDIA RINCON DE DURANGO no se pronunció frente a la medida cautelar.

CONSIDERACIONES

La Ley 1437 de 2011 *“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”* consagra de manera específica un régimen de cautelas judiciales orientado a la adecuación de los procedimientos adelantados ante esta jurisdicción, conforme a los nuevos mandatos establecidos por la Constitución Política de 1991, medidas instituidas para permitirle al administrado el acceso a una justicia mediata, instrumental, una justicia provisional que busca dotar de eficacia la tutela judicial definitiva¹.

- Requisitos para la procedencia de las medidas cautelares en la Ley 1437 de 2011 – CPACA-

El artículo 229² del CPACA señala que en todos los procesos declarativos adelantados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte, previo a la notificación del auto que admite la demanda o en cualquiera etapa procesal, es procedente el decreto de medidas cautelares que se estimen necesarias para salvaguardar de manera provisional el objeto de la actuación

¹ Ibídem.

² Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 229: **Procedencia de medidas cautelares.** En **todos los procesos declarativos** que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, **a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia**, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

procesal y la eficacia del derecho que se declara en la sentencia, sin que el decreto de la medida implique prejuzgamiento.

Del mismo modo, la citada codificación procesal consagra en el artículo 230 numeral 3º, lo concerniente a la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo sometido a control jurisdiccional, disposición normativa que en su tenor literal reza lo siguiente:

(...) Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares **podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión**, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (...)

Ahora, en lo relacionado con los presupuestos jurídicos que se deben observar para decretar las medidas cautelares, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 231 establece lo siguiente:

(...) Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o **en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud**. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos". -negritas del despacho-.(...)

De este modo, lo ha planteado el Órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo³, al indicar que:

"(...) La Constitución Política en el artículo 238⁴ otorgó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo **la facultad de suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial**.

El legislador en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-, amplió el catálogo de las medidas cautelares que en la Constitución Política⁵ y en el Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984,⁶ se referían únicamente a la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, por uno más extenso de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión.

En cuanto a la oportunidad para solicitarlas indica el artículo 229⁷ del CPACA que, las medidas cautelares proceden antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier

³ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B Consejero ponente: César Palomino Cortés, providencia del quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00032-00(3007-14).

⁴ Constitución Política. Artículo 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

⁵ Constitución Política, artículo 138.

⁶ Decreto 01 de 1984, artículo 152.

⁷ Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los

etapa del proceso, **con el fin proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.**

Así mismo el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **prevé que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por vulneración de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.** De manera que, su procedencia está determinada por la transgresión del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva. La norma señala expresamente lo siguiente: (...)

Según la regla precedente, podrá decretarse la medida cautelar cuando se cumplan los siguientes requerimientos: a) que así lo solicite y fundamente en debida forma la parte interesada en la demanda o con escrito anexo a la misma; b) que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor; c) o que emerja de los medios de prueba aportados por el interesado y, d) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Debe indicarse como la jurisprudencia ha resaltado, que la decisión sobre la medida cautelar de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, se trata de «mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto»⁸.

De conformidad con el aparte jurisprudencial y las normas citadas, la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos:

- Que se trate de proceso de naturaleza declarativa.
- Que la medida cautelar se torne necesaria para proteger y garantizar, de manera anticipada y provisionalmente, el objeto del proceso.
- Que la violación surja de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud cautelar, por confrontación del acto administrativo demandado con las normas señaladas y las pruebas que soportan la solicitud.
- Prueba siquiera sumaria del perjuicio, en los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho.

derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.⁷

⁸ Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente núm. 2013 00503. Consejero ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: “Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los Jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del C.P.A.C.A. expresamente dispone que ‘[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces ‘la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite’ []. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido.

La Jurisprudencia ya ha ido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o ‘prejuzgamiento’ de la causa []. La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia”

Acorde con lo anterior, es a partir del análisis de los fundamentos de derecho y concepto de violación que se anuncian como trasgredidas con la expedición del acto cuyos efectos de solicita suspender, y/o del material probatorio allegado al medio de control hasta la instancia procesal de la solicitud, que el juez debe determinar si resulta viable el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional.

CASO CONCRETO

Aunque la solicitud de medida cautelar no es presentada en escrito separado del libelo introductorio, conforme lo preceptúa el artículo 231 del CPACA, ello no obsta para que el Despacho analice su procedencia, teniendo en cuenta la prevalencia del derecho sustancial frente a las formalidades.

En este contexto, debe precisarse que si bien, la procedencia de la medida cautelar se justifica por la contravención palmaria y evidente del ordenamiento jurídico, para demostrar dicha situación la parte interesada debe efectuar un análisis de las disposiciones que se señalan infringidas con la decisión de la administración y acreditar probatoriamente la vulneración legal.

Es claro que para considerar la prosperidad de la solicitud de medida cautelar de suspensión de los actos administrativos demandados, a la luz de lo consagrado en la Ley 1437 de 2011, es necesario que se acrediten de manera concurrente los cuatro presupuestos referenciados en líneas anteriores.

Frente a la suspensión del acto administrativo se tiene que la parte demandante solicita como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de la Resolución N°2323 del 17 de abril de 1996, señalando que la misma fue expedida por el ISS en contravía de lo ordenado en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, por cuanto se reconoció la pensión de Sobreviviente teniendo en cuenta que al momento del deceso del señor JHON FERNANDO DURANGO RINCON, se encontraba trasladado a la AFP PORVENIR, razón por la cual no era COLPENSIONES la responsable del reconocimiento de la pensión de Sobreviviente a la demandada NIDIA RINCON DE DURANGO, en calidad de madre.

Indica que no es posible que una persona se encuentre afiliada simultáneamente a los dos regímenes pensionales y por ende recibir del Sistema General de Pensiones el otorgamiento de dos o más prestaciones económicas (PENSION DE SOBREVIVIENTE) por los mismos tiempos cotizados o laborados como es el caso de la demandada quien se encuentra percibiendo pensión de sobreviviente con ocasión al fallecimiento de su hijo JHON FERNANDO DURANGO RINCON por la AFP PORVENIR y por la Administradora COLOMBIANA DE PENSIONES Colpensiones de acuerdo a la Resolución N°2323 del 17 de abril de 1996.

Conforme a las pruebas allegadas al plenario, tenemos que el acto administrativo respecto del cual se ha impetrado la suspensión de sus efectos—figura en la parte considerativa y resolutive lo siguiente:

**“INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
Seccional Valle del Cauca**

RESOLUCIÓN N° 2323 de 1996

Por medio de la cual se resuelve un Recurso.

(...)

CONSIDERANDO

1.- Que por medio de la Resolución No. 06965 del 28 de Agosto de 1.995, se negó la Pensión de Sobrevivientes del asegurado JHON FERNANDO DURANGO RINCON , Afiliación # 916453825 de la Seccional Valle, solicitada por la señora NIDIA RINCON DE DURANGO, en calidad de ascendiente porque teniendo sociedad conyugal vigente, no existe dependencia económica del hijo.

2- Qu obrando en su propio nombre y dentro del término legal, la interesada interpuso los recurso de la Vía Gubernativa para solicitar se reconsidere tal determinación, ya que considera tener derecho a la Pensión de Sobrevivientes de su hijo (....)

3.- Que con el fin de resolver el Recurso de Reposición, se revisó nuevamente el expediente, observando que existe dos declaraciones que coinciden en que los esposos estaban separados desde hace ya varios años y en este sentido se citó a declarar a la interesada, la cual reafirmó estar separada de su esposo y depender económicamente de su hijo, porque lo que gana en labores de modistería es muy poco.

4.- Que en virtud de o anterior es procedente conceder la prestación solicitada por cuanto se reúnen los requisitos y condiciones que exige la Ley 100 en sus artículos 46 y 47 y 16 reglamentario parcial 1889 de 1.994, ya que está plenamente probado que la solicitante es la madre del causante (ver folio 8), que durante el año anterior a la fecha de la muerte (18 de febrero de 1.994 y 18 de Febrero de 1.995 había cotizado más de 26 semanas (Folio 14) y las declaraciones de dependencia económica son coincidentes.

Que el (la) señor AGUDELO GALEANO ARISTIDES DE JESUS identificado con CC No. 4.363.195, solicita el 28 de agosto de 1990 el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de vejez, radicada bajo el No. 20136800367799.

(...)

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer para Revocar la Resolución No. 06964 del 28 de Agosto de 1.995 por la cual se Negó una Pensión de Sobrevivientes.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder la PENSIÓN DE Sobrevivientes del Asegurado fallecido JHON FERNANDO DURNAGO RINCON, solicitada por la señora NIDIA RINCON, en calidad de madre, a partir del 18 de Febrero de 1.995, en cuantía de \$118.936.00, más los reajustes ordenado por la Ley.

(...)

Dada en Santiago de Cali, a los 17 abril 1996.

(...)

De la misma manera, se observa que fue aportado como prueba con la demanda Oficio No. 012334 del 24 de abril de 1998, por el cual la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. comunica a la demandada NIDIA RINCON DE DURANGO y otro, lo siguiente:

“es grato comunicarle que se han reunido los requisitos de ley para acceder al reconocimiento del beneficio pensional por usted solicitado 28 Febrero 1997, en consecuencia procederemos a realizar el pago de la pensión a partir del mes de Abril. Cabe anotar que la liquidación está basada en la documentación entregadas por ustedes, por lo cual, se deducen los siguientes aspectos:

1. El monto de su pensión fue liquidado con el 45% del Ingreso Base de Liquidación, el cual asciende a la suma de \$126.926 y correspondiente a un total de 346 días de cotización al Sistema de Pensiones de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

- 2. El reconocimiento del presente beneficio pensional se otorga en forma retroactiva, esto es, a partir del día del siniestro, ocurrido el 18 de febrero de 1995 de conformidad con la liquidación adjunta (...).
- 3. El valor de la mesada pensional para el año de 1998 asciende a la suma de \$203.826, valor que será reajustado año a año con fundamento a lo señalado por el Artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Artículo 40 del decreto 692 de 1995 (...)

Cordialmente,

MARTHA C SALAMANCA RAMIREZ
Directora de Beneficios”

Igualmente, obra certificado expedido el 24 de agosto de 2018 por Porvenir en el cual en el numeral 8, figura lo siguiente:

N o.	No. DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	MODALIDAD PENSIONAL/ OBSERVACION	FECHA PRIMER PAGO PRESTACION
(..)					
8	16453825	CC	DURANGO RINCON JHON FERNANDO	RENTA VITALICIA	29/04/1998

Así mismo, fue aportado documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Oficina de Bonos Pensionales en donde figura la liquidación provisional de Bono Pensional Tipo A, en el cual obra que el señor JHON FERNANDO DURANGO RINCON se trasladó a Porvenir el 23 de julio de 1994, de la misma manera en este mismo documento obran como tiempos de afiliación al ISS, los siguientes:

Afiliación 916453825 Patronal 04328405563 FULLER ASEO Y MANTNTO LTDA
11/SEP/1992 INGRESO \$70,260
03/OCT/1992 RETIRO \$70,260

Afiliación 916453825 Patronal 04016121469 HIERROS BRASILIA LTDA
11/NOV/1992 INGRESO \$79,290
15/DIC/1992 RETIRO \$79,290

Afiliación 916453825 Patronal 04328200358 REYES MALBERTO
17/ENE/1994 INGRESO \$107,675
23/JUL/1994 TRASLADO

Para un total de tiempo de 35.00 semanas.

Conforme a lo anterior, el debate procesal en cuestión va encaminado a determinar si es procedente que la demandada NIDIA RINCON DE DURANGO, perciba de manera simultánea dos pensiones de sobrevivientes provenientes del sistema general de pensiones, una por parte de Colpensiones (Antes ISS) y la otra por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) PORVENIR.

Al respecto y como marco normativo, tenemos que, el artículo 12 de la Ley 100 de 1993 consagra que el “Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber”: el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RSPMPD) y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), cuya escogencia es libre y voluntaria por parte del afiliado conforme al artículo 13 ibidem; no obstante, en ningún caso, el afiliado

puede estar afiliado simultáneamente a estos dos regímenes, según el artículo 16 de esta misma ley.

De la revisión de las pruebas allegadas, esto es el expediente administrativo del señor JHON FERNANDO DURANGO RINCON (Q.E.P.D) se extrae que el citado desde el año 1992 se afilió al ISS, quien el 23 de julio de 1994 se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) – PORVENIR -, falleciendo el 18 de febrero de 1995, razón por la cual la pensión de sobrevivientes fue reconocida a la demandada NIDIA RINCON DE DURANGO en cuantía de un salario mínimo legal vigente por parte del entonces ISS a través del acto administrativo acusado, a la vez, igualmente fue reconocido este mismo beneficio pensional en la modalidad de renta vitalicia por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S:A, en cuantía de un salario mínimo legal vigente, encontrándose activa en la nómina de pensionados tanto de Colpensiones, como de la AFP - PORVENIR.

Así las cosas, conforme a los preceptos legales antes citados, tal como lo argumenta la entidad demandante, se establece que no es procedente que una persona se encuentre afiliada simultáneamente a los dos regímenes pensionales y por ende recibir del Sistema General de Pensiones el otorgamiento de dos o más prestaciones económicas por los mismos tiempos cotizados o laborados como es el caso de la señora NIDIA RINCON DE DURANGO, encontrando por ello, que la demanda se encuentra razonablemente fundada en derecho toda vez que la Resolución No. 2323 del 17 de abril de 1996 fue expedida en contravía de los preceptos legales invocados en el libelo como vulnerados, en la medida que el afiliado JHON FERNANDO DURANGO RINCON se había trasladado a Porvenir, en consecuencia Colpensiones tiene legitimación en la causa por activa para demandar su propio acto, dado que al continuar con el pago de esta pensión se prolonga un detrimento al Sistema General de Pensiones y los recursos públicos atentando contra los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad que sustentan dicho sistema.

Sumado a lo anterior, se encuentra que en virtud a que la demandada NIDIA RINCON DE DURANGO igualmente recibe pensión de sobrevivientes por parte de Porvenir, en la misma cuantía reconocida por parte de Colpensiones (un salario mínimo legal vigente), su derecho fundamental a la seguridad social se encuentra amparado, y en esta medida prima el interés general, en procura de la no afectación significativa al patrimonio público, por tanto, se accederá a decretar la medida cautelar deprecada.

En consecuencia, el Juzgado

R E S U E L V E:

DECRETAR la suspensión provisional de la Resolución N°2323 del 17 de abril de 1996, por los motivos expuestos en la parte motiva del presente proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
Juez

RIm

76001-33-33-001-2020-00078-00

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Firmado Por:

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO

JUEZ

JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE CALI-VALLE DEL CAUCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3a7e69a7daf620b8eb8fd21527253a040692e023c85370ba0412d82587015532**

Documento generado en 13/04/2021 02:39:53 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>